

Los fundamentos en la sesión

En términos generales, los legisladores presentes esgrimieron razones históricas, jurídicas y geográficas sobre los motivos que los impulsan a reafirmar la soberanía en estas tierras.

Se destacó que las actuales poblaciones o parajes que pasarían a nuestra provincia "son ocupadas pacíficamente desde hace 150 años por catamarqueños".

Destacaron que en las mismas tienen jurisdicción la policía de la vecina provincia, escuelas, servicios de agua potable, centros de salud, etcétera, lo cual es provisto por Catamarca y que es esa provincia la que constantemente realiza inversiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Los temas se retrotrajeron incluso a la época de la colonia y las primeras cédulas reales delimitando el territorio de cada provincia.

Se menciona postura de Juan Felipe Ibarra, "quien en 1828 tomó la estancia de Choya y llegó hasta Frías para incorporar el camino real (que unía Buenos Aires con Perú) a la provincia de Santiago del Estero". Todo esto para implantar una aduana principal, lo que era importante desde el punto de vista económico.

Se habló también del acuerdo de los gobernadores Manuel Rodríguez y Pedro León Gallo de Catamarca y Santiago respectivamente, quienes en 1828 convinieron en aspectos muy desfavorables para Catamarca porque fija una legua de territorio para que Frías quede para Santiago.

Es necesario, imprescindible e inpostergable el dictado de una ley de pesca a fin de dar un marco legal que ordene la actividad pesquera permitiendo, una adecuada administración del recurso y garantizando de esta forma una actividad sostenida y sustentable en el tiempo, con el fin de preservar el recurso para futuras generaciones;

El manejo de los recursos marítimos implica un tratamiento equilibrado en el vínculo ecológico, económico y político del mismo. O sea que la protección de la biodiversidad no es sólo un inventario de especies, conlleva, además, en forma dinámica otras variedades que deben ser tenidas en cuenta, como la explotación (biológicamente sustentable en el tiempo), pues el estudio sobre el estado de los recursos económicamente explotables trascienden a su localización y evolución, abarcando la dinámica de sus poblaciones, su evolución en el tiempo y sus interacciones con el ecosistema;

Estos aspectos marcan profundamente nuestras disidencias con el proyecto oficial;

En nuestro país la conservación ictícola se regula (y el proyecto oficial insiste en lo mismo), controlando el acceso al mismo (otorgamiento de permiso de pesca) y no las capturas reales, de ese modo, gracias a la discrecionalidad que históricamente imperó en el otorgamiento de los permisos, la preservación de las especies ha servido de excusa para negarle permisos a unos y otorgárselos a otros, llevando a nuestra industria pesquera a una

Rechazan actitud de catamarqueños

La cuestión limítrofe con la vecina provincia de Catamarca fue debatida en la Legislatura. La declaración se girará al Senado de la Nación y al Poder Ejecutivo nacional

Anoche, la Legislatura provincial rechazó el comportamiento de parlamentarios catamarqueños que sesionaron en territorio santiagueño, 8 kilómetros de la ciudad de Frías, departamento de Choya, y que ahondó el problema limítrofe.

El diputado friense Fernando Alberto Dahbar defendió y reafirmó los derechos territoriales sobre la zona del departamento Choya, logrando la aprobación del proyecto de declaración.

En ese sentido, recordó que esa área fue reconocida como parte integrante de la provincia de Santiago del Estero por ley nacional 22.742 y ratificada por fallo de la Corte Suprema de Justicia, recaído en los autos caratulados "Rodríguez José Enrique y otros, por los supuestos delitos de amenazas e incendio en grado de tentativa, cuestión de competencia", que se tramitó en el Juzgado del Crimen de Frías.

Asimismo, Darío Moreno respaldó la posición oficialista, mocionando para que esta declaración se gire al Senado de la Nación (a la Comisión de Asuntos Constitucionales), al Poder Ejecutivo nacional (Ministerio del Interior) y al gobierno de Catamarca.

El único que se opuso a esta iniciativa fue el friense radical Ricardo Alfonso Aye.

"El Liberal", 27-11-96.

3

Solicitada por el señor senador Gagliardi

gran desnacionalización y desindustrialización, con el agregado actual de una preocupante sobreexplotación.

En nuestro país ha llegado el momento de tomar decisiones contundentes en materia pesquera.

Se impone un borrón y cuenta nueva, y una vez que esto suceda habrá que redistribuir con sentido común y reglas claras la "torta" pesquera; dándole prioridad de acceso al recurso a la pesca artesanal, y a los barcos pesqueros, a las inversiones de capital nacional, a las plantas de tierra, y a los buques nuevos construidos en el país.

Estas situaciones están perfectamente contempladas en nuestro proyecto y tienden a amparar los intereses nacionales de las industria pesquera representadas por más de 1.000 barcos pesqueros y más de cien plantas en tierra con una inversión genuina de más de 1.000 millones de dólares.

Con relación a la inpostergable necesidad del dictado de una Ley Nacional de Pesca, no puedo, como rionegrino y patagónico dejar de resaltar los problemas específicos que la carencia de un marco legal de la actividad ocasiona a nuestra provincia.

Recursos del golfo San Matías

El principal recurso pesquero lo constituye la merluza común (*Merluccius hubbsi*) que en este caso es una unidad de stock que habita en jurisdicción provincial.

Definición: "En sentido amplio una unidad poblacional o stock es un grupo de peces que se automantienen mediante reproducción, a través del tiempo y en un área razonablemente definida. Una característica importante de un stock es su reacción uniforme a la explotación. En ese sentido las unidades de stock de una población dada pueden ser tratadas separadamente a través de todo el rango de distribución de la especie".

Fuentes: Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) e Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni".

Legislación

Constitución Nacional

Art. 121. — Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Art. 124. — ...

"Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio."

Legislación Nacional

Ley 17.500

Artículo 1º — *Los recursos del mar territorial argentino son propiedad del Estado nacional que concederá su explotación conforme a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.*

25 de octubre de 1967

Onganía-Alvarez

Ley 20.136

Artículo 1º — Sustitúyanse los textos de los artículos 1º, 2º y 12 de la ley 17.500 (XXVII-C, 2.798) por los siguientes:

Artículo 1º: Los recursos vivos existentes en las zonas marítimas bajo soberanía Argentina son propiedad del Estado nacional, el que podrá conceder su explotación conforme a la presente ley y su reglamentación.

Artículo 2º: Los recursos a que se refiere el artículo anterior sólo podrán ser explotados por embarcaciones con pabellón argentino y con previo permiso otorgado por la autoridad competente.

Artículo 12: Toda infracción a la presente...

Art. 2º — Deróguese toda disposición legal o reglamentaria que se oponga a la presente.

Art. 3º — La presente disposición no afecta lo establecido por la ley 18.502 (XXX-A, 65)

5 de Febrero. De 1973.

Ley 18.502.

Artículo 1º — Las provincias ejercerán jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a sus costas, hasta una distancia de tres millas marinas medidas desde las líneas desde las más altas mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, en que se tomarán desde la línea que une los cabos que forman su boca.

Art. 2º — El Estado nacional ejercerá jurisdicción exclusivamente sobre el mar territorial argentino a partir

del límite indicado en el artículo anterior hasta el máximo fijado en la ley 17.094 (Adla XXVI-C-1974).

Art. 3º — La jurisdicción atribuida a las provincias por el artículo 1º de esta ley, se ejercerá sin perjuicio de la que corresponde al Estado nacional en toda su extensión del mar territorial.

Art. 4º — Lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 17.500 (Adla XXXVII — C — 2798), no será de aplicación dentro de los límites indicados en el artículo 1º de la presente ley.

RESUMEN

La ley 17.500 y su modificatoria, la ley 20.136, le otorgan al Estado nacional la propiedad sobre los recursos vivos del mar en aguas bajo soberanía argentina.

La ley 18.502 establece la jurisdicción provincial hasta 3 millas marinas medidas desde las líneas de mas altas mareas, salvo en los casos de los golfos, en que se tomaron desde las líneas que unen los cabos que forman su boca (art. 1º).

Asimismo establece que lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 17.500 no será de aplicación dentro de los límites antes indicados.

La ley 20.136 modificatoria de la ley 17.500 no sólo no deroga la 18.502, sino que indica expresamente que no la afecta (artículo 3º).

La Constitución Nacional establece en su artículo 124 que los recursos existentes en jurisdicción provincial son propiedad de los estados provinciales quienes conservan todo el poder no delegado por ella al gobierno federal (artículo 121). La regulación de la explotación pesquera no es una de las facultades delegadas.

La mayoría de los recursos pesqueros del Golfo San Matías no son especies migratorias transzonales y se encuentran exclusivamente en jurisdicción provincial.

En todo caso son compartidos entre dos estados provinciales (Chubut y Río Negro), pero de ninguna manera con el Estado nacional quien ha confirmado esto mediante estudios propios o conjuntos con el instituto rionegrino.

CONCLUSION

1. — La Administración de los recursos pesqueros no migratorios del Golfo San Matías es potestad de la provincia, según la legislación nacional vigente; o en todo caso de administración compartida entre Chubut y Río Negro.

2º — Lo que puede definirse como un problema netamente técnico se ha convertido en una cuestión política ante la inexistencia de voluntad acuerdista que ha manifestado el Estado nacional, aún cuando la legislación vigente es amplia y contundentemente favorable a la posición provincial.

Las autoridades nacionales del área pesca imponen trabas al desarrollo pesquero rionegrino desconociendo la potestad provincial para manejar sus recursos, en una actitud claramente inconstitucional e incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

PROBLEMATICA ACUCIANTE

La situación planteada hasta aquí esta causando graves daños a las empresas pesqueras provinciales ya que, en

función de que el tema está en discusión, no se les permite la incorporación de buques que no cuenten con permiso de pesca nacional. Esto se ha realizado "de palabra" ya que la legislación provincial no contempla el requisito de permiso nacional para acceder a la reserva pesquera provincial, por lo que ante un planteo formal no podremos denegar los permisos y complicaríamos aún más la cuestión.

El problema ya existe puesto que la firma "Camaronera Patagónica S.A." posee varios buques sin permiso nacional para merluza común lo que ha derivado en numerosas infracciones por parte de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura.

Asimismo existe en la provincia un proyecto pesquero aprobado el 12-12-94 que no ha podido concretarse por la imposibilidad de incorporar a la matrícula nacional dos embarcaciones extranjeras, ya que para eso se requiere autorización de la autoridad pesquera nacional. Si bien se necesita solo una autorización, las autoridades del área entienden que ésta debe ser un permiso de pesca nacional y como el caladero se encuentra sobreexplotado no están dispuestas a otorgarlos, aún cuando en el Golfo San Matías exista disponibilidad de recursos.

El proyecto mencionado lleva el nombre de "Riomar S.A." y con una inversión de U\$S 11.000.000 prevé ocupación para más de 300 personas, además de formar parte de un grupo empresario que planea radicar en la provincia otras cinco empresas, tres de las cuales ya han sido radicadas vía Acuerdo Pesquero Argentina — Unión Europea. Por supuesto que su permanencia en la provincia depende en buena medida de la concreción del proyecto "RIOMAR S.A.".

A modo de corolario podría decir que, en mi opinión, la concreción de este proyecto y empresas asociadas podrían terminar por sí solos con la desocupación en la localidad de San Antonio Oeste.

Refiriéndome específicamente a los dictámenes de mayoría y radical, desearía resaltar brevemente las diferencias sustanciales que diferencian nuestra posición.

1. En el artículo 1º definimos la "explotación biológicamente sostenible" como aquella cuya captura máxima sostenible (CMS) "no afecte la preservación del recurso".

La definición del proyecto Ludueña-Mac Karthy habla de aprovechamiento racional de los recursos vivos, que no es lo mismo ni pone límite preciso a la captura.

2. Luego de coincidir en materia de domicilio y jurisdicción exclusiva de las provincias, sobre aguas interiores y sobre el mar territorial adyacente, hasta una distancia de 12 millas marinas según lo establece la ley 23.968. Comienzan a observarse otras diferencias.

Mientras que nuestro proyecto dice en el artículo 3º que son del "dominio del Estado nacional" los recursos vivos existentes en la zona exclusiva, en la Plataforma Continental, definidas por la ley 23.968 y decreto 2.693 de 1991, también llega aquellas especies migratorias que aun estando afuera de las 200 millas "intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva argentina". En el artículo 4º del proyecto de Mac Karthy y Ludueña no aparecen tales precisiones.

3. Nuestro proyecto define "una autoridad de aplicación que es el Consejo Federal Pesquero" que, como se afirma en los fundamentos del mismo, es compatible con la Constitución Nacional en su artículo 124 y su concor-

dante y tradicional dogma del artículo 121 de la misma. (Agregar actas provinciales.)

Nuestro proyecto invita y propone para la celebración de un "pacto o trabajo interjurisdiccional" entre la Nación, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Y lo propone como medio para resolver conflictos interjurisdiccionales, unificar el manejo del recurso y fijar criterios de distribución del Fondo Federal Pesquero.

Por su parte el proyecto del PJ propone que el tema lo siga manejando la Secretaría de Pesca, hasta el título del capítulo IV lo delata, se llama "autoridad de aplicación y Consejo Federal Pesquero", sobre nuestra propuesta y la del PJ no debemos dejar de señalar lo siguiente:

Con el actual proyecto oficial, no podría haberse ejercido la policía de contralor que en abril de 1988, con el auxilio de la justicia federal realizó la provincia de Santa Cruz en bajo Mazaredo, zona del golfo de San Jorge de su jurisdicción, deteniendo y haciendo descargar a 14 barcos congeladores que allá depredaban. En nuestro proyecto el Consejo Federal Pesquero, conducido por la Nación y las provincias costeras, previo tratado o pacto jurisdiccional tendrá por "función principal la interpretación y aplicación armónica de las normativas nacional y provinciales", en la materia, "evitando la superposición de jurisdicciones y la fragmentación de autoridades" (en nuestro proyecto todo surge del artículo 5º).

4. En el proyecto Mac Karthy-Ludueña, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Pesca que se crea como organismo subordinado y dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sin perjuicio de las atribuciones que en tercer término se le otorgan al Consejo Federal Pesquero (artículo 6º del proyecto).

En nuestro proyecto tiene un rol de conductor político, administrativo y económico de la actividad un Consejo Federal Pesquero que tarde o temprano será el protagonista de la convocatoria a un Pacto Federal Pesquero (artículo 5º de nuestro proyecto que deberá cotejarse, en principio con los 3º, 4º y 6º del proyecto Mac Karthy-Ludueña).

5. Fijada la política, en nuestro proyecto, entonces si se crea la Secretaría de Pesca en el ámbito ministerial nacional (Economía y Obras y Servicios Públicos) y se le confiere el rol de ejecutora de la política de contralor esencial de la actividad: la del rendimiento máximo sostenible, que en pesca marítima equivale a la posibilidad de realizar una captura máxima sostenible y nada más.

Ambos incisos e) del artículo 7º del proyecto de la UCR y del PJ se refieren a este esencial problema y mientras el proyecto Mac Karthy-Ludueña se refiere a las especies del ciclo anual permitiendo solamente "volúmenes de captura que se determinan con ajuste a sus particularidades"; el proyecto de la UCR en el ciclo anual permite solo "volúmenes de captura que se determinan con ajuste a sus particularidades biológicas".

La cuestión tiene la fundamental y decisiva importancia de que si se hubiera fijado la CMS con ciclo anual y en concordancia con sus particularidades biológicas.

No se hubiera explotado la merluza como hoy ocurre, con secuelas en la cadena biológica, aún no determinadas. El proyecto Ludueña-Mac Karthy habla solo de particularidades.

6. Estas definiciones no son capricho, ni un delirio de los técnicos del viejo Instituto de Biología Marina Interuniversitario, antecesor del INIDEP que preveía un ciclo que duró hasta los años 80, en que suicidamente se creyó en la riqueza inconmensurable de los saladeros y pesquerías argentinas, esta sobreexplotación de la merluza que se da en los años 90, es un poco de aquella insuficiencia soberbia y suicida, donde todos hemos tenido responsabilidades.

De allí que hallamos presentado un proyecto que hace particular hincapié en la severidad de las sanciones basado en un estudio de las zonas, aquellas de pesquerías intensamente explotadas, normalmente explotadas y subexplotadas.

Subdividimos las cuotas en globales e individuales de pesca, tratando de facilitar el acceso a las mismas a medianos y pequeños armadores, evitar la concentración económica y conseguir una exportación integral de los recursos vivos del mar.

7. Queremos hacer renacer el binomio pesquero, porque concederemos permisos de pesca a quien sin tener buque para pesca tenga instalaciones para procesar en tierra.

Este es un sistema que a fines de los años 60 y comienzos de los 70 encontró, junto al crédito de la banca oficial, una muy buena predisposición en el empresario nacional para acompañar el desarrollo del sector, y adquirir los primeros buques congeladores y buques factoría en el exterior.

Nuestro proyecto encomienda a la Secretaría de Pesca el régimen de fijación en cada pesquería del porcentaje de especies acompañantes con relación a la especie principal autorizada.

Nuestro régimen de sanciones es preciso y severo, contempla bien claramente la participación, la coautoría, el rol de los socios directores y gerentes de la empresa propietaria, arrendataria o armadora, los que quedan al mismo tiempo inhabilitados por el mismo plazo de la sanción, para presentarse como personas individuales y aspirando a ser adjudicatarias de las cuotas individuales de pesca.

Las infracciones según su naturaleza y su grado generan sanciones judiciales directas o sanciones de

multas, sobre todo, aplicables por la Prefectura Naval Argentina, las que podrán ser apeladas por ante la cámara federal competente. Todo con debido proceso legal. En el caso de las sanciones de multa se aplicará la regla solve et repete.

8. Otro estímulo para los armadores pesqueros? Además del que beneficiara a los titulares de frigoríficos y plantas de procesamiento terrestres, es la primera adjudicación sin cargo de cuotas individuales de pesca; hasta el 50% de las referidas cuotas se adjudicarán sin cargo y restante 50% mediante el régimen normal de licitación pública.

En suma; nuestro casuismo y detallada perspectiva penal, tiene su fundamento en que en esta materia pesquera hay inquietudes evidencias de que se han sobrepasado los límites de sustentabilidad biológicas a largo plazo.

Hasta la década del 80 el eje de la actividad era la promoción de la misma, ahora desde la notable expansión de 1991 en adelante dicho eje se ha desplazado de la promoción de la actividad al control de las capturas.

Este, nuestro proyecto convertido en ley, cambiará el régimen que regula aquella sobre explotación, por otro adaptado a las circunstancias actuales.

Por los demás no es posible invocar la regla de la autorregulación expuestas por normas del mercado, porque en esta actividad existe la prioridad común del recurso que se extrae del mar, configurando una falla estructural del mercado, que las leyes del mismo no pueden superar.

Finalmente, nadie nos disputará la racionalidad y originalidad de dejar atrás la vieja época de las matrículas de embarcación como titulares de los derechos de pesca, con los inconvenientes que traía y sigue trayendo aparejado porque ahora en el régimen propuesto las cuotas de pesca son adjudicadas a personas físicas o jurídicas y no a los buques de su propiedad, con lo que se espera una mayor dinámica, flexibilidad y transparencia en la actividad pesquera, sin olvidar la medida de promoción que significa, al igual que la equiparación del personal operativo de las plantas terrestres de pescado para que el pago a los mismos se deduzca del pago del canon del permiso de pesca en un 15%. Por todo ello aconsejo la aprobación del dictamen de minoría.

4

Solicitada por el señor senador Alasino

Señor presidente:

Alguien, con pluma periodística, pero no exenta de poesía y objetividad nos describe así el escenario:

"Las Sierras Grandes son la verdadera columna vertebral orográfica de la provincia de Córdoba. Sus cumbres, cuyos picos más elevados superan los 2.200 metros de altura, dominan el territorio cordobés. En la cima de esta serranía, en la Pampa de Achala, los inclementes vientos apenas permiten un rala y escasa vegetación. Sólo el tabaquillo, la paja brava, y uno que otro mimbre, resisten su fuerza devastadora. En esta meseta árida y agreste se dividen las aguas. Miles de vertientes nacen aquí buscando los cauces que llevarán las aguas hacia el Este y el Oeste.

El paisaje es imponente. El perfil recoso que contrasta sobre el horizonte da una dimensión distinta del tiempo,

aproxima a la idea de lo permanente, lo eterno. Achala, como las otras pampas ubicadas sobre las Sierras Grandes, está bordeada de quebradas que se desprenden de la altura buscando el llano.

Los ríos Paso de las Piedras y Paso del Quemado son producto de numerosos arroyos surgidos de las vertientes acumuladas subterráneamente en la Pampa de Achala.

En una depresión conocida como Cancha de las Yaguas se enfrentan, y del encuentro de sus aguas surge perpendicular hacia el este el río Condorito: a 2.000 metros de altura.

Desde allí se desliza aprovechando cuanta depresión le ofrece el terreno, empujando, horadando, cayendo en espectaculares saltos y cascadas. Abajo, en el llano sus aguas se irán juntando con el río del Sur y darán lugar al

San José, que en confluencia con el río de la Suela formarán el Anisacate.

Alguna vez, en muy remotos tiempos, cuando el Hombre todavía no estaba para guardar testimonio, las formidables fuerzas que habitan en el interior de nuestro planeta, se estremecieron y sus ecos ganaron la superficie. La tierra se sacudió desgarrada. La roca cedió a la gigantesca presión, viejas montañas desaparecieron en la profundidad, otras, hasta entonces inexistentes ocuparon sus lugares, el paisaje cambió. Nada quedó como antes. En una de esas terribles convulsiones el cerro que hoy se conoce como Pampa del Cóndor Hua se partió.

La herida fue enorme, profunda. La montaña se abrió al sol mostrando sus entrañas de roca viva.

Desde entonces está allí, en el mismo borde Este de la Pampa de Achala es uno de los lugares más inaccesibles de esa cadena montañosa. Una de las quebradas más bellas que logró la naturaleza en estas tierras: La Quebrada del Condorito.

La Quebrada del Condorito es el abismo más profundo de las serranías cordobesas. Ochocientos metros de caída flanqueada por paredes casi verticales. En el fondo de la garganta, el Río Condorito pulveriza sus aguas en una caída de casi 60 metros, dando lugar a un singular y permanente estruendo.

Lo inaccesible del lugar indudablemente decidió el cóndor a elegir esta quebrada como residencia. Su presencia dio el nombre a la Quebrada, en cuyas laderas el ave instaló sus nidos y posaderos. Quienes conocen la zona aseguran haber visto hasta cincuenta cóndores juntos sobrevolando la Quebrada, que son sus dominios y los comparte con las águilas, los aguiluchos, los jotes, y hasta algunas parejas de halcones peregrinos.

El puma es otro de los nobles de la zona. Su presencia es temida y temible, pero el monarca es el cóndor."

Tanta belleza debe ser preservada para siempre. Este es el objetivo de la ley que hoy sancionamos. El Perito Moreno en visionaria actitud propuso en 1905, declarar Parque Nacional a esta imponente región. Por muchas décadas eso no pudo ser. Recién hoy, 92 años después, Córdoba tiene su primer parque nacional.

Al darle sanción a esta ley tan especial para los cordobeses, no estamos más que respondiendo por una parte a

generalizadas inquietudes de instituciones de Córdoba, el país y el mundo. No es una exageración señalar que hasta de Japón por boca del mismísimo emperador se recibieron peticiones en este sentido. Pero por otra parte, estamos cumpliendo también con lo que prescriben las más importantes declaraciones universales sobre el medio ambiente y preservación de la fauna y la flora silvestres. Nos estamos refiriendo, de entre otras, a la declaración de Estocolmo, de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza, de 1982; y en fin la Declaración de Río de Janeiro de 1992.

El articulado de este proyecto de ley, que viene de la Cámara de Diputados con media sanción, es el de estilo en los casos de creación de los parques nacionales.

Por el artículo 1º se aprueba el convenio celebrado entre la provincia de Córdoba y la Nación Argentina. Por el artículo 2º se acepta la cesión de las 40.000 hectáreas; por el artículo 3º se aceptan las condiciones bajo las cuales Córdoba cede esa porción de su territorio. Por el artículo 4º se señala que esa región quedará sometida al régimen de la ley 22.351 de parques nacionales y reservas nacionales. Por el artículo 5º se declara de utilidad pública el área descripta. Por los artículos 6º y 7º el estado se reserva la facultad de modificar límites y asumir con todas las erogaciones que demande.

Finalmente, quiero poner de relieve muy especialmente que si se ha podido llegar a este momento es sin lugar a dudas por la acción de muy muchos, que con su estudio, su esfuerzo, por su colaboración han contribuido al Parque Nacional Quebrada de los Condoritos. Pero particularmente, deseo enfatizar la inestimable y perseverante tarea que realizó el naturalista Fabián Ramallo, quien por décadas coadyuvó con su labor para que éste, que es su sueño hoy se viera concretado.

El hoy nos está acompañando aquí, y en nombre de los cordobeses, quiero expresarle nuestro reconocimiento. Al igual que al eminente científico doctor Lutti, como así también al diario "La Voz del Interior" que a través de sus páginas dio cabida a múltiples artículos de Ramallo y de editoriales propias de ese matutino. A través de ellas, se creó en Córdoba el aliento y el clima indispensables para llevar adelante este proyecto. Y, en fin, a todos ustedes, les agradezco este voto unánime.

5

Entregada por el señor senador Berhongaray

Fundamentos al proyecto de explotación tambera

El proyecto referente a la explotación tambera, que hoy es centro de debate en este recinto tiene una trayectoria de larga data, ha sido sancionado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 9 de noviembre de 1994, luego pasó a la Cámara de Senadores en revisión y, adecuadamente pretendemos adaptar el estatuto que regula las relaciones entre las partes que intervienen en la explotación del tambo —que data del año 1946 decreto 3.750/46— llamado estatuto del tambero mediero, a la nueva realidad que hoy nos supera.

En los cincuenta años transcurridos desde entonces la explotación de los tambos ha sufrido una enorme transformación.

La masiva incorporación de los sistemas de ordeño mecánico a partir de los años 70 modificó extraordinariamente la tarea del tambero. Al mismo tiempo la incorporación de las nuevas técnicas de producción de pasto (incorporación de nuevas especies forrajeras, praderas permanentes, fertilización, verdeos, pasturas, etc.) la implementación de métodos racionales eficaces para su mejor aprovechamiento (pastoreo rotativo e intensivo), la introducción de sistemas permite la reserva de forrajes de calidad (silos, rollos, etc.) y el desarrollo de la inseminación artificial que posibilitó la acelerada introducción de las mejores líneas genéticas en producción de leche, han transformado la dimensión de la explotación y las características y los volúmenes de producción de la lechería argentina.

Este proceso se ha intensificado en los últimos años en los que la producción de leche de la Argentina ha crecido a un ritmo notable.

En el curso de esta transformación las relaciones entre el propietario, la explotación de tambo y el tambero han estado sometidas a una constante evolución; resulta una realidad incontestable que las tareas que hoy tiene a su cargo el tambero son sustancialmente diferentes a las que pudo prever el estatuto dictado en 1946. La particular forma de explotación del tambo, primitivamente el ordeño a mano que admitía una extracción por vaca de 4 litros de leche diarios sufrió una irresistible tecnificación, que aseguró una extracción de 60 litros de leche de una campeona. Toda una evolución y revolución en el agro.

De más está recordar que el tambo es una de las principales fuentes de recursos de nuestra economía, y esencial en determinadas regiones de nuestro país, que compiten con la producción láctea de productos importados de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos que cuentan con excelentes subsidios colocando a nuestra industria en posiciones desventajosas, a pesar de ello se mantiene viva.

Cabe resaltar que el viejo Estatuto hizo lo suyo, su elasticidad permitió variar los porcentajes de pago, el incremento de capital con inversiones a los fines de obtener mayor producción etcétera, el artículo 9º del Estatuto previó el libre acuerdo de partes para los tambos de ordeño mecánico, norma floreciente para esa época; y la adecuación por parte de la jurisprudencia sentó el principio de lo que fue tan arduamente cuestionado, la naturaleza jurídica de la relación que los une, es de carácter privado.

Es necesario señalar que en el desarrollo de este proceso nuestra justicia ha encontrado serias dificultades para hallar una solución constante y uniforme acerca de la naturaleza jurídica de la relación que regula el Estatuto del Tambero (decreto 3.750/46) y respecto de la aplicación de esa normativa a las nuevas situaciones que el Estatuto no pudo contemplar. Basta expresar que la jurisprudencia de las tres provincias en las que se desarrolla la enorme mayoría de las explotaciones tamberas, es decir Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe ha pasado por diferentes posturas respecto de la naturaleza jurídica de la relación que une al dueño de la explotación con el ejecutor de la tarea, ésta es de derecho privado y no una relación regida por la ley laboral, aunque a la fecha existan posturas divergentes sobre el particular.

Por todo ello es necesario dictar una ley que otorgue seguridad jurídica a esta relación contractual, de importantísima explotación productiva en acelerado proceso de evolución que se adecue a las características actuales de las explotaciones del tambo y que impulse el desarrollo de la producción lechera en nuestra República.

Urge la constitución de relaciones contractuales sobre la base de un contrato agrario de explotación, que de común acuerdo las partes deseen pactar, donde el interés por el resultado sea el motor de la actividad, con derechos y obligaciones que surjan del convenio acordado. Es lo que propugnamos con la sanción del proyecto, al referirse en el artículo 2º a la naturaleza jurídica del contrato, dice que: "se trata de un contrato agrario, y que en todo lo que no esté previsto le son de

aplicación las disposiciones del Código Civil. En el artículo 13, al decir que a todos los efectos fiscales y previsionales son sujetos del contrato como titulares de explotaciones independientes. En el artículo 14, al decir que las personas físicas de un contrato de explotación son consideradas como trabajadores autónomos frente a la legislación previsional, laboral y agregamos fiscal a todos sus efectos.

Antiguamente, el tambero-mediero era un empresario que podía tener peones rurales a su cargo (personal dependiente) y a su vez estaba a las órdenes del propietario (tambero titular) provocando una responsabilidad a veces insuperable, pues no tenía suficiente autoridad para definir o establecer medidas eficientes, ambigüedad sobre la figura del tambero pues él también era un empleado. Ahora dejamos zanjada esa dualidad, empresario-empleado, con el proyecto en el artículo 8º, son responsables individualmente por el personal que contraten, sin existir solidaridad entre las partes, cada uno deberá soportar las cargas fiscales, tributarias, laborales y previsionales, y responder frente a la ley como trabajadores autónomos. Asimismo, en el artículo 6º, el tambero-titular tiene solo la administración y dirección de la explotación pudiendo delegar dicha función. El tambero tiene a su cargo las tareas necesarias para la explotación, siendo responsable de los bienes, hacienda y elementos de la explotación.

Alguna otra aclaración se merece el articulado referido a la rescisión del contrato, el estatuto dispone su inscripción en un registro que lleva al efecto la Secretaría de Trabajo, carácter titutivo del Estado, controlador del cumplimiento de la ley. El proyecto dispone: en caso de rescisión contractual por incumplimiento de una de las partes, la parte incumplidora deberá abonar una indemnización equivalente al 15 % de lo que la otra parte deja de percibir del período no cumplido del contrato, tomando como base un promedio de los ingresos devengados en el trimestre calendario anterior a la fecha de rescisión y notificar con antelación la voluntad de rescindir, sin notificación deberá abonar la cifra que el damnificado deja de percibir en ese mes sin preaviso. Síntesis: no se perjudica al tambero, por el contrario se encuentra amparado por la ley misma, de aplicabilidad directa por la justicia en lo civil, sin supeditarla a la protección de la burocrática administración estatal.

Se tipifica a la cría recria de hembras, elemento esencial de la explotación tambera como actividad anexa, es complementaria en su estructura asociativa y en participación, a la vez fomenta la adhesión al nuevo régimen jurídico pues facilita los sistemas de control de la producción lechera.

Se resguarda la casa-habitación, prescribiendo que: cuando el tambero debe vivir en el predio rural, el titular deberá proporcionarle una vivienda digna, en condiciones normales de habitabilidad, la que será ocupada por el tambero y su familia.

Es necesario otorgar a la sociedad una nueva legislación en lo que respecta, en virtud de la dinámica que ha sufrido la explotación del tambo, las nuevas relaciones contractuales que se han generado y que se generarán, frente a la inseguridad jurídica en que nos encontramos inmersos y más aún nuestros trabajadores rurales, solicito la aprobación del proyecto en aras de un avance le-

gislativo, de acuerdo a las circunstancias actuales y al progreso acelerado que genera el mundo moderno, pero sin que con ello se despreteja al trabajador rural sino por el contrario sostengo que la normativa debe interpre-

tarse y dejar expresamente sentada la finalidad de la misma que es proteger a la parte más débil de la relación contractual.

Por todo lo expuesto, solicito vuestro apoyo.